

perspectiva mundial

UN SEMANARIO SOCIALISTA PUBLICADO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

VOL. 69/NO. 30 8 DE AGOSTO DE 2005

ADENTRO

No a los registros en trenes de N.Y.

—EDITORIAL, PÁG. 11

Mineros de Arizona apoyan lucha por unión en Utah



Perspectiva Mundial/Tamar Rosenfeld

Picnic del Local 1332 del sindicato UMWA en la mina McKinley en Arizona. Wilbur Willey (montado en la camioneta) da la bienvenida a los mineros de la Co-Op.

POR OLYMPIA NEWTON

ST. MICHAELS, Arizona—Unos 75 mineros del carbón y sus familias asistieron al picnic anual celebrado el 24 de julio por el Local 1332 del sindicato minero UMWA. El local representa a los obreros de la mina McKinley, una mina a cielo abierto de la empresa Pittsburgh and Midway (P&M), la mitad de la cual está en la Nación Navajo. La mitad

de estos mineros son navajos.

Una delegación de la mina Co-Op, en Huntington, Utah, participó en los festejos: Celso Panduro, Jesús Leyva, Humberto Miranda, Bill Estrada y Alyson Kennedy. Recibieron una calurosa bienvenida de los miembros y funcionarios del local.

Mientras todos hacían cola para la

Sigue en la página 11

Policía en N.Y. empieza registros en los trenes

POR PAUL PEDERSON

NUEVA YORK, 25 de julio—La policía aquí inició puntos de control a las entradas de ciertas estaciones del subterráneo el 21 de julio para registrar los bolsos de los pasajeros del sistema de transporte público. Las autoridades usaron los atentados del 7 y del 14 de julio en Londres para tratar de lograr aceptación pública para esta medida.

Mientras tanto, en el Reino Unido, el gobierno ha iniciado una política de “disparar a matar” contra individuos “sospechosos” que supuestamente no obedecen las órdenes de la policía. El 24 de julio, la policía mató a un electricista, dándole siete tiros en la cabeza.

El jefe de policía de Nueva York, Raymond Kelly, dijo que la policía había contemplado instituir los registros hace un año y medio pero que no había sido oportuno hasta los atentados de Londres. “Hay que saber lo que el público está dispuesto a aceptar. Aún hace falta un suceso para lograr apoyo público”. Según la política anunciada, se les negará la entrada a la estación a las personas que no acepten ser registradas.

Además del alcalde republicano Mi-

chael Bloomberg, los cuatro candidatos demócratas a la alcaldía se pronunciaron a favor de la nueva medida. “Yo le he pedido consecuentemente al alcalde que desarrolle un plan completo para mantener la seguridad del subterráneo”, dijo la candidata Virginia Fields.

Martín Koppel, candidato a alcalde por el Partido Socialista de los Trabajadores, condenó la medida más reciente como un ataque contra los derechos del pueblo trabajador (ver declaración en la página 11).

El 24 de julio, policías fuertemente armados rodearon un autobús de la Gray Line que llevaba unos 60 turistas en el distrito de teatros en Manhattan. Hicieron que los pasajeros se bajaran y esposaron a cinco hombres. Un empleado de la Gray Line dijo a la policía que los hombres parecían ser del sur de Asia y que tenían los bolsillos “abultados”. Fueron puestos en libertad al quedar evidente que eran simplemente turistas. Ese mismo día la policía cerró por más de una hora la estación de tren Penn Station cuando un pasajero supuestamente alegó que tenía una bomba en una maleta, la cual resultó ser inofensiva.

Visita a la finca El Charcote en Venezuela

Campesinos en pie de lucha por tierra, latifundistas intensifican contraofensiva

POR ARGIRIS MALAPANIS Y CARLOS CORNEJO

SAN CARLOS, Venezuela—“A mí me dieron un registro agrario, que tengo que renovar cada seis meses. Pero aún no he obtenido carta agraria ni permiso de permanencia. Me apro-

baron un crédito de 26 millones de bolívares [12 mil dólares] pero aún no me han depositado nada. Cuando la Guardia Nacional nos sacó de esta tierra, hace algunos años, nos dieron 156 mil bolívares [73 dólares] de indemnización. Una mugre de dinero.

Pero volvimos de todas maneras y ahora estamos produciendo. Espero que ganemos”.

Esto es lo que relató al *Militant* Pablo Villamizar, un campesino del Hato El Charcote, el 9 de julio. Sus comentarios eran parecidos a los de docenas de campesinos que entrevistamos aquí. El hato es parte del municipio Rómulo

Sigue en la página 10

Patrones del carbón en Utah revisan demanda de ‘difamación’

POR PAUL MAILHOT

SALT LAKE CITY—La empresa C.W. Mining, al redactar de nuevo una demanda judicial de hostigamiento, apunta directamente contra los mineros del carbón que luchan por ser representados por el sindicato minero UMWA y ser restituidos a sus puestos en la mina Co-Op en Huntington, Utah. Los abogados de la compañía de carbón y del Sindicato de la Asociación Internacional de Trabajadores Unidos (IAUWU) entablaron la demanda modificada el 13 de julio.

En el documento de 75 páginas, los mineros de la Co-Op ahora son acusados de “fraude” de inmigración, además de prácticas laborales injustas, difamación y otros cargos.

El UMWA y sus funcionarios internacionales, la AFL-CIO de Utah y otros sindicatos y organizaciones que han apoyado a los obreros de la Co-Op siguen siendo acusados en esta demanda. El *Militant* y los dos diarios principales de Utah —el *Salt Lake Tribune* y el *Deseret Morning News*—también son acusados de difamar a la compañía por informar sobre lo que han dicho los

Sigue en la página 11

Nos. 6 y 7 de ‘Nueva Internacional’ Oferta especial— ¡\$25 por ambos!



“Ha comenzado uno de los infrecuentes inviernos largos del capitalismo. Acompañado de la marcha acelerada del imperialismo hacia la guerra, va a ser un invierno largo y caliente.” —Jack Barnes

Los actuales conflictos interimperialistas que se agudizan se ven impulsados por las primeras etapas de una depresión mundial —lo que serán décadas de convulsiones económicas, financieras y sociales y batallas de clases— y por el cambio más extenso en la política y organización militar de Washington desde finales de los años 30, cuando los gobernantes norteamericanos se aprestaban a sumarse a las crecientes guerras asiáticas y europeas, transformándolas en la Segunda Guerra Mundial.

Los trabajadores de disposición de clases debemos encarar esta histórica coyuntura para el imperialismo, esta crisis cataclísmica para el “Occidente” y la “cristiandad”. Y derivar satisfacción y gozo al ponernos “en su cara” conforme trazamos un curso revolucionario para afrontarla.

Nueva Internacional no. 6, \$16

Nueva Internacional no. 7, \$14

ORDENE POR
WWW.PATHFINDERPRESS.COM

Los Angeles: socialistas lanzan campaña para concejal municipal

POR FRANK FORRESTAL

LOS ANGELES, 24 de julio—El Partido Socialista de los Trabajadores anunció aquí que ha postulado a Diana Newberry, empacadora de carne de 32 años de edad, para concejal municipal en el Distrito 14. Los partidarios del PST lanzaron una campaña hoy para poner el nombre de Newberry en la boleta electoral. La candidata socialista entregó los documentos electorales

Sigue en la página 10

No a registros en trenes de N.Y.

Dedicamos este espacio editorial a los siguientes extractos de una declaración emitida el 26 de julio por Martín Koppel, candidato a alcalde de Nueva York por el Partido Socialista de los Trabajadores.

La campaña del Partido Socialista de los Trabajadores se opone a la nueva política de registros de las pertenencias personales y de los interrogatorios por la policía en los trenes y autobuses de Nueva York. Esta medida de la administración de Bloomberg, apoyada por los cuatro candidatos demócratas para alcalde, se usará para justificar mayores intentos de socavar las garantías constitucionales contra las incautaciones y los registros arbitrarios. El blanco no son principalmente los “terroristas” sino el pueblo trabajador.

Esta medida va acompañada de otros pasos destinados a socavar la capacidad de los trabajadores y agricultores de resistir los crecientes ataques patronales contra el nivel de vida y las condiciones de trabajo.

Los gobernantes de Estados Unidos buscan obtener la aceptación pública de estas medidas antidemocráticas, anticipando la resistencia de los trabajadores y agricultores ante las consecuencias cada vez más devastadoras de la crisis económica capitalista.

El principal problema que enfrentan los patrones y el gobierno que representa sus intereses no es al-Qaeda. Es la clase trabajadora. Porque los patrones tienen que atacar a nuestra clase para revertir la caída a largo plazo de sus tasas de ganancia. La única forma de hacerlo es al extraer brutalmente más ganancias de la mano de obra del pueblo trabajador, haciendo que trabajemos más duro y horas más largas, deprimiendo salarios y recortando beneficios.

Las guerras y ocupaciones militares de Washington en el exterior son una extensión de la arremetida patronal contra el pueblo trabajador en Estados Unidos. La cam-

paña del Partido Socialista de los Trabajadores exige la retirada inmediata e incondicional de todas las fuerzas armadas imperialistas —norteamericanas, de la ONU y otras— de Iraq, Afganistán, Yugoslavia, Corea, Colombia, Haití y la Bahía de Guantánamo, Cuba. Decimos: ¡Manos fuera de Irán y de Corea del norte! ¡Alto a la guerra económica de Washington contra Cuba! ¡Manos fuera de Venezuela!

Ante todo, con la “seguridad del suelo nativo” se pretende convencer al pueblo trabajador de que subordinemos nuestras luchas —por mejores salarios y condiciones de trabajo, por los derechos de los negros, por la igualdad de la mujer— a los llamamientos a la “unidad nacional” y movilizar a los “americanos” en apoyo a la “lucha contra el terrorismo”. Los críticos liberales de la administración Bloomberg promueven el argumento de “proteger *nuestra* seguridad”, acusando a sus contrincantes republicanos de no hacer lo suficiente para “resguardar *nuestra* ciudad”.

Pero para los trabajadores existen dos Nueva York y dos Estados Unidos: por un lado, el del puñado de familias gobernantes multimillonarias, y por el otro lado, el del pueblo trabajador, la gran mayoría que produce la riqueza. El pueblo trabajador no tiene intereses en común con nuestros explotadores. Tenemos intereses comunes con nuestros hermanos trabajadores, agricultores y los oprimidos a nivel mundial.

Los trabajadores que rehusan ceder en sus luchas —desde los huelguistas del cobre en Arizona y Texas hasta los obreros de la construcción que luchan por una unión en Nueva York— sientan un ejemplo para todo el pueblo trabajador. Al oponerse a los registros por parte de la policía en Nueva York se defiende los derechos que los trabajadores necesitan para organizarse y actuar a favor de los intereses de nuestra clase.

Demanda de la C.W. Mining

Viene de la portada
obreros en su lucha de sindicalización.

En una audiencia celebrada el 14 de junio en Salt Lake City en relación a los tres periódicos, el juez federal Dee Benson ordenó que los abogados de la compañía volvieran a presentar su demanda. Benson dijo que la demanda anterior era “amorfa” y no decía claramente a quién demandaba y cuáles eran las supuestas difamaciones.

Los patrones del carbón están usando este caso como parte de su campaña para contrarrestar la lucha de los mineros de Co-Op por un sindicato.

El nuevo alegato de la compañía —que ahora figura de manera prominente en la demanda— afirma que varios mineros individuales son culpables de fraude por conseguir empleo en la Co-Op con “documentos de trabajo falsos”. Estos mineros habían trabajado muchos años en la mina.

Los abogados de la compañía alegan que la Administración del Seguro Social informó a la C.W. Mining en mayo de 2004 que varios empleados no tenían números válidos del Seguro Social. Por eso, dicen, la compañía se vio obligada a despedir a “los trabajadores fraudulentos” en diciembre cuando los trabajadores se negaron a “rectificar el problema”. Los despidieron siete meses después del supuesto aviso del gobierno y una semana antes de una votación para decidir la representación sindical.

La compañía alega que los mineros estaban implicados en una “actividad de extorsión” porque habían “ideado maniobras para obtener dinero con alegatos falsos”. Dice que este cargo se refiere a tretas para obtener salarios por medio del “empleo ilegal” y para obtener contribuciones de otras personas mientras los mineros estuvieron en huelga.

El nuevo reclamo mantiene la acusación de que el UMWA y mineros de la Co-Op son culpables de “prácticas laborales injustas”. La compañía alega que los trabajadores ya estaban representados por el IAUWU, el cual los mineros califican como un grupo dirigido por la compañía que nunca actuó a favor de los intereses de los trabajadores.

Los abogados de la compañía volvieron a redactar la sección del caso que alega quién es culpable de difamar a la C.W. Mining y al IAUWU. Ahora son 23 páginas las que se enfocan en declaraciones hechas por determinados mineros de la Co-Op. Entre las supuestas difamaciones

están los comentarios de mineros de que las condiciones en la mina son peligrosas, que los mineros eran muy mal remunerados en comparación con otros mineros de la zona, que el seguro médico de la compañía era tan caro que era como no tener seguro, y que los mineros estaban luchando por un sindicato verdadero.

La compañía citó a varios mineros por supuestamente hacer las declaraciones más “difamatorias”: Ricardo Chávez, Bill Estrada, Celso Panduro, Alyson Kennedy, Gonzalo Salazar, Jesús Salazar, Juan Salazar y Ana María Sánchez. Añadió a la lista de acusados a otro minero, Raymundo Silva, quien no fue mencionado en los documentos iniciales de la compañía y que no participó en la huelga de 10 meses que concluyó en julio de 2004. Lo citan por decirle a un diario hace unos meses: “Vi cómo los patrones se reían de los mineros durante la huelga” y que “los abusos en la mina” ya le hartaban.

Trece páginas de la nueva demanda citan artículos del *Militant* que la compañía tacha de calumniosos. Al presentar las supuestas difamaciones, los abogados de la compañía afirman, “El *Militant* y sus agentes hicieron las siguientes publicaciones, no como informes sobre las declaraciones de otros, sino como versiones propias”. Luego citan como difamatorios más de 70 artículos o editoriales del *Militant*.

La C.W. Mining ahora también alega que varios de los demandados son culpables de violaciones de privacidad. Sus abogados escriben que los demandados “dieron publicidad a asuntos relativos a los demandantes que los presentaban ante el público de una manera falsa, lo cual sería muy ofensivo para cualquier persona razonable”.

Al final de la demanda la C.W. Mining alega violaciones de privacidad, interferencia intencional en relaciones económicas y conspiración civil, y sobre esa base pide un fallo favorable e indemnización. Acusa de estos cargos a los mineros individuales de la Co-Op, al UMWA y a sus funcionarios, al *Militant* y a sus directores y reporteros, al sindicato petrolero PACE, a George Neckel y el grupo Utah Jobs with Justice y a otros más.

Los abogados de los demandados responderán a las acusaciones de la compañía. Los abogados de los periódicos solicitaron una prórroga para responder a la demanda y la corte les otorgó un plazo hasta el 16 de agosto. Los abogados de los otros demandados pidieron una prórroga hasta el 1 de septiembre y se les concedió. Cuando los abogados de la compañía respondan a esos documentos legales, se fijará una nueva audiencia.

Mineros de Utah

Viene de la portada

comida, Wilbur Willey, miembro del Local 1332, se subió a una camioneta y se dirigió al público. “Damos la bienvenida a nuestros hermanos, que pronto serán plenos miembros del sindicato, los mineros de la Co-Op en Huntington, Utah”, dijo. “Estuvieron en huelga 10 meses contra la mina Co-Op, una empresa dirigida por una familia. ¿Cuántos de nosotros lo aguantaríamos? Pero sí podremos hacerlo si lo impone la necesidad. Es el sindicato el que les da voz y es la voz de ustedes la que hace al sindicato.”

Los miembros del Local 1332 señalaron que su contrato con la P&M vence el 6 de agosto de 2006. Ellos ya libraron cuatro huelgas contra la compañía. En la última, en el verano de 2000, derrotaron el intento de los patrones de establecer turnos de 12 horas.

Los mineros de la Co-Op pusieron una exposición de fotos sobre sus 22 meses de lucha por ganar la representación del UMWA. Explicaron que han estado montando líneas de piquete e invitaron a todos a un picnic de solidaridad que se va a realizar el 27 de agosto en Huntington.

Los mineros de Utah también informaron que la C.W. Mining, dueños de la mina, están siendo demandados por Aquila Inc., una empresa con sede en Missouri que tiene una central eléctrica. Después de despedir a muchos de sus trabajadores en la víspera de una elección por la representación sindical en diciembre pasado, los patrones de la Co-Op no han podido producir suficiente carbón para cumplir con su contrato. La Aquila está demandando a la C.W. Mining por daños y perjuicios por haber tenido que comprar carbón de otra fuente a un precio más alto.

“Si se toma en cuenta el impacto total del contrato--es decir, desprovistos de ese contrato y al tener que reemplazarlo-- las pérdidas podrían sumar entre 10 millones y 20 millones de dólares por año”, dijo Keith Stamm, principal ejecutivo de Aquila al *Megawatt Daily*. El contrato entre las dos compañías va desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008. La C.W. Mining le avisó en abril a Aquila que cancelaría el contrato por la falta de mano de obra en la mina.

El 16 de diciembre de 2004 se celebraron elecciones por la representación sindical en la mina de Huntington. La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) aún no ha anunciado el resultado de la votación. Cerca de 40 mineros, en su mayoría inmigrantes mexicanos, fueron despedidos una semana antes de dicha votación.

La lucha sindical estalló el 22 de septiembre de 2003, en respuesta a un cierre patronal, cuando 75 mineros protestaron contra los patrones, exigiendo la reincorporación de un compañero de trabajo que había sido despedido injustamente, así como mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y dignidad en el trabajo. Los mineros transformaron el cierre patronal en una huelga que duró 10 meses. Fueron restituidos a sus puestos en julio de 2004 después de un acuerdo mediado por la NLRB, pero luego fueron despedidos al mes siguiente. El UMWA ha impugnado los despidos, una disputa que está pendiente ante la junta laboral.

Mensajes de apoyo y contribuciones para esta lucha pueden ser enviados a: Co-Op Miners Fund, c/o UMWA District 22, 525 E. 100 S., Price, UT 84501. Para más información, llamar al Distrito 22 del UMWA; tel.: (435) 637-2037.

Tarifas de suscripción y dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde hallar distribuidores del *Militant* y de *Nueva Internacional*, así como una gama completa de libros de Pathfinder.

Campesinos en Venezuela

Viene de la portada

Gallegos, aproximadamente 15 kilómetros al sur de San Carlos, la capital del estado de Cojedes.

La familia Villamizar es una de las 800 familias que han ocupado la mayoría de la propiedad por unos cinco años. Este rancho ganadero de 12 900 hectáreas es administrado por Agroflora, conocida aquí como la “compañía inglesa”, porque es propiedad de los Vestey, una familia capitalista británica. El Grupo Vestey tiene 14 ranchos en Venezuela, abarcando un total de 350 mil hectáreas, la mayoría de ellos en el estado de Apure, donde se cría ganado. Tiene inversiones similares en Argentina y Brasil.

El 8 de enero, el gobernador de Cojedes, Jhonny Yáñez, envió tropas de la Guardia Nacional a El Charcote para escoltar a los inspectores que determinarían en tres meses si los Vestey obtuvieron propiedad del hato legalmente. En marzo, el gobierno de Cojedes dijo que Agroflora no había probado titularidad legítima de unas 6 mil hectáreas de El Charcote, que fueron declaradas tierra del estado. El gobernador prometió que para el mes de septiembre entregaría títulos a los campesinos que trabajan esas áreas, y desalojaría a los campesinos que estuvieran ocupando tierras privadas.

“El gobernador intervino para salvaguardar los intereses de los latifundistas,” dijo José Pimentel, un dirigente de la ocupación y miembro del Frente Campesino Nacional Ezequiel Zamora. “El estuvo de acuerdo que el resto de la tierra la mantuviesen los ingleses, que son los invasores. Seis meses después que los inspectores vinieran, ni un solo campesino ha obtenido carta agraria, y muchos de estamos amenazados de expulsión. La Guardia Nacional nos ha expulsado una vez desde el inicio de nuestra lucha. El sicariato de la compañía inglesa trabaja con impunidad. En el último año y medio, los campovolantes de los latifundistas asesinaron a un campesino y han ‘desaparecido’ a tres.”

Los orígenes de los campesinos aquí son variados. Pastor Oliveros dijo que antes trabajó en fábricas en Valencia pero no le alcanzaba para vivir ya que lo cesanteaban de un empleo tras otro. Otros eran trabajadores rurales sin

tierra en esta zona.

Algunos son jóvenes. Doris Freite, de 21 años, y su familia cultivan maíz en unas 15 hectáreas. “Estamos luchando por esta tierra”, dijo. “Me uní a la lucha cuando tenía 16 años”. En ese época 600 familias ocupaban partes del rancho que en su mayor parte estaban sin cultivar. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que el gobierno aprobó en noviembre de 2001, animó a los campesinos a persistir. Esa ley permitía que campesinos que estuvieran cultivando tierras ociosas o poco productivas trataran de obtener títulos legales.

“Sin títulos no podemos tener créditos y no tenemos máquinas”, dijo Freite. “Para trabajar la tierra tenemos que machetear y sembrar a mano. Pero, por lo menos ahora tenemos derecho a un pedacito y no nos han podido sacar de aquí. Ya los ingleses no se meten con nosotros. Antes venían hasta acá para insultarnos o tirarles sus animales a nuestros hijos y a nuestros cultivos”.

Ahora la mayoría de los campesinos han cercado sus ranchos y sus tierras aledañas para prevenir que el ganado pisotee sus productos. Cerca de 5 700 cabezas de ganado deambulan por los pastos aledaños, según el administrador del hato Anthony Richards, mucho menos que los 14 000 que habían hace 5 años.

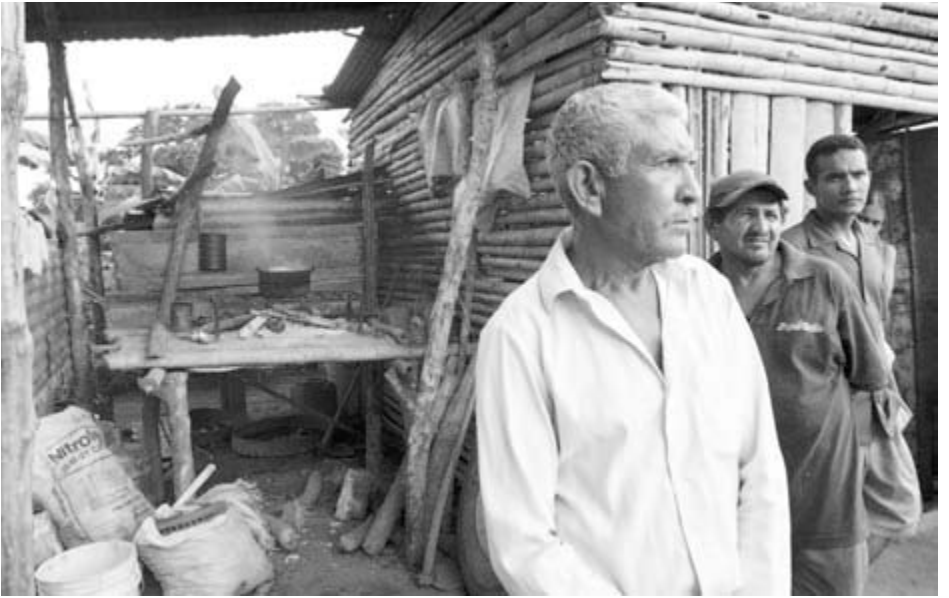
Las autoridades locales se han negado a proveer agua potable o electricidad a los campesinos, incluso en áreas declaradas tierra del estado, argumentando que existen apelaciones legales por parte de Agroflora. “Eso es para los que tienen dinero”, dijo Ender Pirela, señalando los cables de electricidad que corren en paralelo al camino de 17 kilómetros que cruza el hato. Pirela conduce una camioneta que transporta campesinos a los pueblos cercanos, además de cultivar sus 15 hectáreas. “¡Qué injusticia!”, dijo, “cuando vemos los postes eléctricos a algunos metros o kilómetros y no podemos tener acceso a la luz”.

Mientras que la falta de maquinaria agrícola es casi universal, algunos se las han ingeniado para abrir pozos de agua e instalar bombas de agua manuales y han logrado diversificar su producción. Ferboss Quintero y su esposa Ana Julia cultivan una variedad de pimientos picantes y dulces, pepinos, tomates,

de 90 mil personas tiene un índice de desempleo del 14 por ciento. Durante el último año cientos de residentes han sido desalojados de sus hogares ante la disparada de los alquileres.

Los socialistas han adoptado como meta recoger mil firmas para poner a Newberry en la boleta electoral. La ciudad requiere la firma de 500 electores inscritos que residan en el distrito. La última fecha para entregarlas es el 11 de agosto. “Mucha gente se alegró de ver que alguien se postula con un programa obrero, alguien que está a favor de los sindicatos y se opone a los partidos gemelos del capitalismo, los demócratas y los republicanos”, dijo Newberry.

Un ex emparador de carne, cuya fábrica había cerrado, dijo que no podía firmar por que estaba bajo libertad condicional, pero se alegraba de escuchar a un candidato que hablaba a favor de movilizar la fuerza de los sindicatos para resistir los ataques patronales contra los salarios y las condiciones de trabajo.



Perspectiva Mundial/Argiris Malapanis

Campesinos en la finca El Charcote el 9 de julio, en tierra que han ocupado durante cinco años. La finca, propiedad de la familia capitalista Vestey del Reino Unido, está en el estado venezolano de Cojedes. De la izquierda: Eugenio Sánchez y Pablo Villamizar.

yuca, cebolla, melones, plátanos y otras frutas y vegetales. Recientemente también han plantado árboles de cacao. “Vendemos a los Mercales a bajo precio”, dijo Ana Julia Quintero. “Se refería a las tiendas del gobierno que proveen productos comestibles básicos, como arroz, sal, azúcar, aceite, pollo, pescado en lata y productos lácteos, a precios hasta por debajo de la mitad del costo en el mercado. Los Mercales se están extendiendo por todo el país. “Nuestro objetivo no es solamente sobrevivir de la tierra sino producir comida para el país”, dijo Quintero.

Venezuela importa más del 60 por ciento de sus alimentos de Canadá, Estados Unidos, Brasil y otros países. Mientras tanto, cerca del 5 por ciento de la población es propietaria del 75 por ciento de la tierra cultivable, que en su mayor parte está ociosa. Según el Instituto Nacional de la Tierra (INTi), por lo menos 115 mil familias campesinas han obtenido cartas agrarias desde el 2001. Sin embargo, la mayoría de los productores rurales, unas 3 millones de personas, o el 13 por ciento de la población, aún no tienen tierra. Muchos, como los de aquí, han venido exigiendo tierra y préstamos a bajo interés de los bancos del estado.

Polarización entre clases sociales

Al mismo tiempo, la polarización entre las clases sociales aumenta. Grandes agricultores, rancheros y otros capitalistas también están siendo más audaces en la defensa de sus intereses. Están trabajando con las fuerzas burguesas dentro del gobernante Movimiento Quinta República (MVR) y con la oposición respaldada por Estados Unidos, mientras usan sus propios sicarios para intimidar a los campesinos.

Según *El Nacional*, uno de los diarios de Venezuela, del 1 de julio, los propietarios de los hatos de El Charcote, Piñero, Paraima y La Bendición Ramera han presentado demandas judiciales para revertir los fallos del INTi que han declarado parte de sus tierras propiedad del estado. La primera semana de julio, los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional presentaron una moción que pide a el Tribunal Supremo de Justicia que declare inconstitucional la ley de reforma agraria del 2001. Esa misma semana, el Tribunal Supremo acordó suspender temporalmente la decisión del INTi tomada en el año 2003 de otorgar títulos de propiedad de tierra a los campesinos que estaban ocupando las más de 5 mil hectáreas del rancho el Coquito en Altagracia de Orituco, en el estado de Guárico.

Funcionarios del INTi hacen todo lo posible para explicar que el gobierno

no está expropiando la tierra. En una entrevista el 11 de julio, preguntamos a Ibelis Vernet, un economista en las oficinas centrales del INTi en Caracas, si la toma de El Charcote era un primer ejemplo de tales acciones. Vernet respondió que la tierra no había sido expropiada, sino “rescatada”. Ya que los Vestey no podían probar título legal de propiedad de esa parte del hato, esas tierras se volvían automáticamente propiedad estatal, dijo. La constitución de Venezuela, señaló, defiende la inviolabilidad de la propiedad privada.

Campesinos de El Charcote dijeron que Yáñez, un dirigente del MVR, envió inspectores para ayudar a que Agroflora retenga más de la mitad del hato. Durante una marcha de 5 mil campesinos el 11 de julio en Caracas, reporteros del *Militant* comprobaron que las acciones de Yáñez no eran una aberración. En algunos estados se ha usado a la Guardia Nacional y a la policía varias veces para desalojar campesinos de tierras ocupadas. (vea Venezuela: campesinos protestan por ataques de matones, exigen tierra en *Perspectiva Mundial* del 25 de julio).

La ofensiva legal de los grandes rancheros y otros capitalistas está acompañada por amenazas y asesinatos de campesinos. Esta teniendo éxito en enlentecer la reforma agraria y frustrar los esfuerzos de miles de campesinos por obtener tierra y créditos. En la Yauquera, un área de 25 mil hectáreas, cerca de El Charcote, que los tribunales entregaron recientemente a los campesinos, Julio Emenegildo Rodríguez, de 62 años, quien estaba vigilando el campamento de los campesinos, fue abaleado la noche del 29 de abril. El es uno de los 138 campesinos asesinados en los últimos seis años por el sicariato de los latifundistas.

Cuando salíamos de El Charcote, antes del anochecer, vimos uno de los campovolantes de los Vestey. Dos hombres iban en motocicleta a través de los campos. Uno de ellos, muy joven, llevaba un rifle. Instantes antes había lanzado tiros al aire.

“Los campovolantes andan en moto y salen solamente por la tardecita”, dijo Pirela. “Son unos cobardes que les pagan un sueldo para atemorizarnos. Pero, no les tenemos miedo. El Charcote es de los campesinos. Estamos cansados de ser explotados como peones. Aquí nos quedamos”.

Si los campesinos de aquí y de otras fincas del país serán desalojados o van a lograr esta meta dependerá de si la clase capitalista mantiene o no en el poder.

Olympia Newton colaboró en este artículo.

Campaña socialista en Los Angeles

Viene de la portada

ayer. Hasta la fecha, 13 candidatos se han postulado. La elección se celebrará el 8 de noviembre. El Partido Socialista de los Trabajadores inició su campaña aquí el día después de concluir exitosamente un esfuerzo similar en Nueva York, donde en 12 días unas 20 mil personas firmaron peticiones para poner la lista electoral socialista en la boleta. Algunos de los voluntarios que ayudaron con la campaña en Nueva York se dirigieron a Los Angeles para ayudar la campaña del PST en esa ciudad.

La elección especial se convocó aquí cuando Antonio Villaraigosa —un demócrata que ocupaba el cargo de concejal por el Distrito 14—fue elegido alcalde de Los Angeles en mayo. El PST postuló para alcalde a Wendy Lyons, miembro del sindicato de la industria alimenticia UFCW.

Newberry hizo campaña hoy en Boyle Heights, un barrio obrero y mayormente latino que está en el Distrito 14. Esta zona densamente poblada